

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	617
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2021-00322-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JOHAN ALEXANDER TRUJILLO YEPES
DEMANDADO:	LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL
ASUNTO:	Rechazo demanda por caducidad de la acción

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).

El señor Johan Alexander Trujillo Yepes, por conducto de apoderado especial, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 967 del 26 de marzo de 2021, por medio de la cual fue retirado del servicio activo por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 42 de la Ley 1015 de 2006, en ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al demandante.

Examinados el libelo introductorio y sus anexos, se advierte que operó la caducidad de la acción, por lo que se impone el rechazo de la demanda y la devolución de los anexos a la parte demandante sin necesidad de desglose.

En efecto, el artículo 164, numeral 2, literal d), del CPACA prevé que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses, contado a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones previstas en otras disposiciones legales.

En materia disciplinaria se ha adoptado la posición jurisprudencial que la contabilización del término de caducidad señalado se hará desde el día siguiente a la comunicación del acto administrativo que materialice la respectiva sanción disciplinaria. Así lo expuso el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 1° de marzo de 2018, radicación 54001-23-33-000-2016-00148-01 (2659-17), M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez:

“En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración.

Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario [...].

La anterior consideración se justifica por cuanto, como se afirmó en los acápites precedentes, solamente en aquellos casos en los que el acto de ejecución tiene incidencia efectiva en la

terminación de la relación laboral administrativa, puede afirmarse que dicho acto tiene relevancia frente al conteo del término de caducidad de las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Ahora bien, como se señaló en líneas atrás, la parte actora pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 967 del 26 de marzo de 2021, por medio de la cual fue retirado del servicio activo por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, en ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al actor y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro a la institución, con el pago de los salarios y haberes que dejó de percibir, de modo que la acción promovida se encuentra sometida al término de caducidad de cuatro (4) meses contenido en el literal d), numeral 2, del artículo 164 del CPACA.

En el presente caso se advierte que el acto administrativo cuya nulidad se impetra fue notificado personalmente al actor el **13 de mayo de 2021**, como se evidencia en el acta obrante en el folio 5 del archivo *“30RespuestaPoliciaNacional.pdf”* del expediente digital y, en esa medida, se tomará el 14 de mayo de 2021 como punto de partida para contabilizar el término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en la ley para instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, pues fue el día siguiente a aquel en que el señor Johan Alexander Trujillo Yepes fue retirado materialmente del servicio activo de la Policía Nacional, de modo que, en principio, contaba hasta el 14 de septiembre de 2021 para impetrar el aludido medio de control.

No obstante, como se instauró la acción sólo hasta el 28 de octubre de 2021, como consta en el acta de reparto que obra en el archivo *“07ActaRepartoNRD20210032200.pdf”* del expediente digital, es innegable que precluyó el lapso de cuatro (4) meses consagrado en el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA.

Ahora, en este caso no es pertinente dar aplicación a lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, toda vez que con la demanda no se aportó constancia de solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público o el acta del trámite surtido ante este, no siendo dable, entonces, la suspensión del fenómeno extintivo de la caducidad de la acción.

Así las cosas, se insiste, debe darse aplicación a lo consagrado en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA, esto es, el rechazo de la demanda por operar la caducidad de la acción y ordenar la devolución de los anexos al interesado, sin necesidad de desglose.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda por caducidad de la acción.

SEGUNDO: DEVOLVER a la parte actora los anexos del libelo, sin necesidad de desglose.

TERCERO: RECONOCER al Dr. Luis Eduardo Saavedra Gaona, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.798 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 169453 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado especial de la parte actora, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante en el archivo *“03.AnexoPoder.pdf”* del expediente digital.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

DSBA

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **df236bcab4a3512eb37f2c1be4454487ec65321f39ba3511d11a3c5cc50458e8**

Documento generado en 03/08/2022 03:27:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>